



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

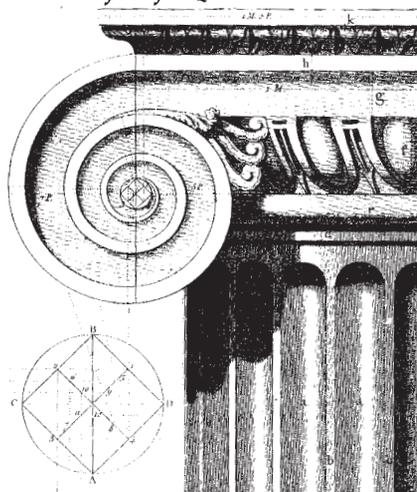
**PERFILES
EDUCATIVOS**

ISSN 0185-2698

Brunner, José Joaquín (1997)
**“EDUCACIÓN SUPERIOR, INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Y GLOBALIZACIÓN”**
en Perfiles Educativos, Vol. 19 No. 76-77 pp. 6-15.

Educación superior, *integración económica* y globalización*

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER**



En el presente trabajo se analizan de manera acuciosa los problemas de calidad, equidad y eficiencia en los sistemas nacionales de educación superior en América Latina, la estructura de las relaciones entre las instituciones de educación superior, la sociedad y los gobiernos, así como las añejas formas de financiamiento. Debido a que el Estado financia la educación superior y reserva la oferta educativa a instituciones subsidiadas, el desarrollo del sistema se haya sujeto a dinámicas corporativas internas, con lo cual queda al margen de metas u objetivos precisos, así como de verdaderas formas de control social, evaluación de resultados y de recursos. La introducción de nuevos procedimientos de evaluación permitiría asegurar al público que las instituciones cumplen ciertos estándares mínimos de calidad, logran las metas requeridas y están en condiciones de responder a la sociedad. Permitirían asimismo que las instituciones mejoraran su desempeño, distribuyeran sus incentivos y definieran mejor sus políticas. Esta perspectiva supone que la educación superior se desarrollará a partir de ahora como una responsabilidad compartida entre el Estado, los usuarios, las propias instituciones y la sociedad.

Problems of quality, equity and efficiency of national higher education systems in Latin America, the structure of relationships among higher education institutions, society and governments, as well as the aged ways of financing are thoroughly analyzed in this article. Due to the fact that the state finances higher education and retains the education offer to subsidized institutions, the system development is subject to internal corporate elements, higher education lacks of accurate goals or objectives, as well as of real means of social control and results and resources evaluation. The introduction of new evaluation methods would allow to guarantee that the institutions comply with some quality standards, achieve the required goals and are able to give answers to the society. Furthermore, they will allow the institutions to improve their performance, distribute their incentives and better define their policies. This perspective presupposes that higher education will develop hereafter as a responsibility shared by the state, the users, the institutions themselves and the society.

Puestos en el umbral del próximo siglo, los latinoamericanos seguimos viajando, al decir de Carlos Fuentes, en “el furgón de cola de la modernidad”.

Después de una década —la pasada— en que el producto por habitante cayó, la inflación aumentó y los problemas distributivos se agudizaron, nos encontramos ahora inmersos en un proceso de importantes reformas económicas y ajustes sociales. Hay algunos signos alentadores: las exportaciones crecen, la inflación desciende, la productividad aumenta y los ingresos personales han empezado a mejorar.

Sin embargo, los problemas esenciales subsisten, lo que da pie a los grandes desafíos que tenemos por delante: por un lado, elevar el crecimiento económico, la competitividad, el ahorro interno y la acumulación de capital físico y humano; por el otro, reducir la pobreza y la desigual distribución del ingreso y las oportunidades.

Para hacer frente a ambos desafíos, no basta sólo con el crecimiento acelerado, como han supuesto algunos. La experiencia de las naciones y la evidencia empírica muestran que para que los resultados del crecimiento lleguen a los pobres y se creen oportunidades más equitativas para todos, se requiere una estrategia que involucre activamente al Estado y políticas dirigidas a ampliar y mejorar los servicios para los grupos más necesitados.

Dentro de esa estrategia, el papel de la educación superior y el desarrollo de capacidades técnicas son esenciales.

* Conferencia presentada en el Primer Simposio Regional Educación, Trabajo y la Integración Económica del Merconorte, organizado por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

** Ministro secretario general del Gobierno de Chile.

En efecto, vivimos una época en la cual el conocimiento aplicado a las esferas de la producción, de la distribución y de la gestión está revolucionando las condiciones de la economía, el comercio entre los países, las bases de la democracia política, la comunicación cultural a nivel mundial y las formas de vida y consumo de la gente.

Más aún: la generación de conocimientos, su diseminación y utilización, han llegado a ser un factor clave para la competitividad de las naciones, mucho más importante, en cualquier caso, que los recursos naturales, el trabajo abundante o el capital financiero.

El hecho es que estamos al comienzo de un desplazamiento desde sociedades cuyo negocio principal consistía en la producción y distribución de cosas hacia unas sociedades cuyo negocio central se organiza en torno a la producción y difusión de *bienes y servicios simbólicos*.

Desde ahora las industrias más avanzadas de nuestro tiempo tienen que ver, casi todas, con elementos intangibles proporcionados por la inventiva humana y su aplicación, cuando no directamente con el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, palabras e imágenes. Así ocurre, por ejemplo, con los productos de la industria farmacéutica; con las telecomunicaciones en general y con las industrias que producen equipos, instrumentos y dispositivos de procesamiento de información; con las aplicaciones tecnológicas en el terreno de la bioingeniería, y con las organizaciones que crean, envasan y distribuyen material para el cine y la televisión.

Por primera vez en la historia emerge una civilización de *información abundante*. Sólo un par de botones de muestra: las publicaciones especializadas de ciencia aparecieron en la segunda mitad del siglo XVII. En el año 1800 existían 100 revistas científicas en el mundo. Un siglo más tarde, se contabilizaron 10 mil. Actualmente hay alrededor de 100 mil. De los científicos que han existido a lo largo de los siglos, cerca de 90% pertenece a las generaciones que se encuentran actualmente en plena actividad.

La biblioteca de una universidad medieval tenía no más de 500 volúmenes. En cambio, se han publicado más libros a partir de la Segunda Guerra Mundial que en todos los siglos anteriores. La Universidad de Harvard demoró 275 años en reunir su primer millón de volúmenes, pero completó el último en sólo cinco años. Los «libros clásicos» han quedado limitados casi exclusivamente al área de la religión, la literatura y las humanidades.

Mientras el conocimiento crece exponencialmente, los costos de almacenar, procesar y transmitir información han estado cayendo un 20% anual durante los últimos 40 años.

A pesar del progreso realizado en materias de educación superior e investigación científico-tecnológica, también en estos ámbitos América Latina y el Caribe marchan en el “furgón de cola”.

Mientras a comienzos de la década representábamos alrededor de 8% de la población mundial, sin embargo la proporción de ingenieros y científicos de la región apenas alcanzaba 2.5% y, en el caso de los autores científicos, a un escuálido 1.3%.

Algo similar ocurre con los recursos invertidos en actividades de investiga-

ción y desarrollo. El gasto mundial destinado a dichas actividades alcanzó 450 billones de dólares en 1990. Nuestra región, en cambio, sólo gastó 3 billones de dólares ese mismo año; o sea, menos de un punto porcentual del total mundial.

Un estudio internacional identificó alrededor de 37 mil áreas especializadas de investigación. Mientras Estados Unidos está activo en prácticamente todas, países como Japón y Alemania aparecen representados en la mitad de ellas y América Latina, en su conjunto, sólo en una de cada seis de dichas áreas.

Luego, si deseamos enfrentar con éxito los desafíos del futuro, necesitamos primero hacer un balance de nuestras capacidades en el ámbito de la educación superior, identificar las razones de su mal rendimiento y buscar soluciones para superar los problemas que traban su desarrollo.

II

Desde antiguo, toda sociedad donde el conocimiento alcanzó un grado relativo de independencia y especialización debió resolver cómo entrenar a sus élites y formar a sus cuadros profesionales y técnicos. Educación superior, de algún tipo, existió en el imperio romano, en Bizancio, en el islam, en China y en la India. “Pero sólo en la Europa medieval emergió una institución reconocible como una universidad: una escuela de altos estudios caracterizada por su autonomía corporativa y la libertad académica, que combina la enseñanza con el cultivo de la erudición.”

En el año 1400 existían en Europa 30 de estas instituciones. Su difusión de ultramar comenzó un siglo más tarde, partiendo por América Latina. Al mo-

mento de completarse nuestro proceso independentista, funcionaban 25 universidades. Todas eran pequeñas, prácticamente no habían cambiado desde su fundación y ofrecían unos pocos cursos de enseñanza tradicional. Los alumnos formaban un selecto grupo. Las normas académicas eran bajas, pero la erudición no tenía relevancia en la mayoría de las profesiones.

El panorama actual es radicalmente distinto. A partir del término de la Segunda Guerra Mundial las instituciones de educación superior proliferan y se diversifican rápidamente; la población estudiantil crece de manera explosiva; los académicos se convierten en profesionales numerosos e influyentes, y los conocimientos y la información se multiplican como nunca antes. La población postsecundaria a nivel mundial es de alrededor de 70 millones de alumnos. Los docentes suman unos 5 millones.

En América Latina, el ciclo de expansión iniciado a mediados del presente siglo se completó hacia 1990. Durante esos 40 años, la matrícula de tercer nivel creció de 270 mil a más de 7 millones de alumnos, al tiempo que la tasa regional de escolarización superior se elevaba de menos de 2% a alrededor de 18%.

Cuatro procesos se asocian a esa vasta transformación: la multiplicación y diferenciación de las instituciones; la creciente participación del sector privado; la ampliación y diversificación del cuerpo docente, y el aumento del número y variedad de los graduados.

Instituciones

Mientras en 1950 existían en América Latina alrededor de 75 universidades, casi todas ellas de carácter público o es-

tatal, en 1995 hay en la región 300 universidades oficiales más, cerca de 400 universidades privadas y, en el nivel no universitario, alrededor de 3 mil instituciones, la mayoría de las cuales son privadas.

En general, el modelo de la universidad pública sirve de patrón de referencia para el resto de las instituciones. Entre las universidades oficiales existe, sin embargo, un alto grado de diversidad. Sólo un selecto grupo podría clasificarse como "universidades complejas"; esto es, entidades que combinan actividades de investigación y docencia de posgrado en un número variado de áreas del conocimiento. La mayoría, en cambio, son universidades exclusivamente docentes, con fuerte énfasis profesional.

Sector privado

En varios países —como Brasil, Colombia, Chile, El Salvador y República Dominicana— la mitad o más de la matrícula de tercer grado se encuentra localizada en instituciones de este sector. En otros —como México, Perú y Venezuela— alrededor de un tercio o más de la matrícula no universitaria es ofrecida por instituciones privadas. En general, puede estimarse que más de 2 millones de alumnos cursan sus estudios en instituciones privadas, de los cuales aproximadamente la mitad pertenece al Brasil.

Las instituciones privadas se caracterizan por su gran variedad. Suele distinguirse entre universidades confesionales, en su mayoría católicas, antiguas y nuevas; instituciones de élite, no confesionales, como existen en México, Venezuela, Colombia, Perú y Chile; e instituciones privadas de mercado, creadas durante las últimas dos décadas. Estas

últimas concentran su oferta en carreras de alta demanda y bajos costos de producción y, en ocasiones, operan como verdaderas “fábricas de títulos”.

Docentes

Han aumentado de 25 mil en 1950 a más de 600 mil en 1990. En algunos países el crecimiento ha sido tal que, según muestra un estudio para el caso de México, durante el periodo 1960-1992, se incorporaron a la educación superior, en promedio, nueve docentes por día.

Del total de docentes de la región, sólo una ínfima fracción (que no supera 10%) son profesores-investigadores con dedicación a la docencia de posgrado y a la investigación. De éstos, unos pocos miles publican regularmente en revistas científicas *main stream*. La gran mayoría, en cambio, desempeña funciones lectivas, sea en instituciones públicas o privadas.

Graduados

En torno a 1950, las universidades de la región graduaban anualmente un número no superior a 25 mil estudiantes, gran parte de ellos en las carreras de derecho, educación y medicina. Hacia 1990, el sistema regional en su conjunto gradúa anualmente a 700 mil estudiantes, de los cuales 75% egresa de instituciones de nivel universitario. En la actualidad, los diplomados provienen principalmente de las áreas de educación, comercio y administración, ciencias médicas y de la salud, y del área de ingeniería y tecnología.

III

La verdadera “revolución” experimentada por la educación superior latinoamericana no desembocó, sin embargo,

donde necesitábamos, sobre todo si se consideran los desafíos que tenemos por delante.

Más bien, hoy existe la percepción de una severa crisis de adaptación del sector a las nuevas condiciones del desarrollo. Los síntomas son variados y se manifiestan de distinta manera en cada país. En común, sin embargo, autoridades, expertos y diversos informes nacionales e internacionales apuntan hacia claros síntomas de mal funcionamiento en tres dimensiones: escasa *calidad* de los procesos y resultados; reducida *equidad* y abundantes problemas de *eficiencia interna*.

Calidad

Esta cuestión surge como una preocupación relativamente reciente en América Latina y el Caribe.

Las profesiones tradicionales reaccionan frente a lo que perciben como un deterioro generalizado de la enseñanza universitaria producto de la rápida masificación, los bajos niveles de escolaridad de los ingresantes, el descrédito de las prácticas pedagógicas convencionales, y la inflación de los certificados profesionales.

Los estudiantes y sus familias constatan que la enseñanza superior ya no proporciona a los jóvenes las mismas garantías de empleo y prestigio de antaño. En particular, los sectores sociales emergentes experimentan la frustración de no encontrar cabida en el mercado debido al bajo nivel atribuido a sus títulos y a la intensa competencia entre los numerosos diplomados que egresan de las instituciones.

Los académicos y científicos reclaman por la escasez de posiciones ligadas a

la investigación, por la falta de condiciones y estímulos adecuados para desarrollar su trabajo, y por el escaso número de programas de posgrado de buen nivel.

Los nuevos maestros de tercer nivel, que trabajan a tiempo parcial en instituciones de bajo nivel académico y gozan de un estatus inferior al de los antiguos catedráticos y al de los académicos modernos, se quejan de inestabilidad, bajas remuneraciones, escaso apoyo y de las deterioradas condiciones en que frecuentemente deben actuar.

Los empresarios manifiestan descontento con la formación de los profesionales y técnicos que deben contratar; *los usuarios* reclaman por la calidad y el costo de los servicios profesionales, y *los medios de comunicación* critican la mala gestión e ineficiencia de las universidades públicas.

Por último, *los gobiernos* han empezado a preocuparse seriamente por la eficiencia del gasto que realizan en este sector, por la proliferación de instituciones privadas y por la ausencia de regulaciones que garanticen la solidez y calidad del sistema.

Equidad

En años recientes empieza a aceptarse la idea de que la combinación entre educación superior gratuita y financiamiento público de las instituciones es explosiva. En efecto, se estima que en la región 50% del subsidio fiscal beneficia a alumnos provenientes del quintil de mayores ingresos. En contraste, los estudiantes del quintil más bajo apenas reciben 5% de ese subsidio. Es decir, los alumnos ricos se benefician 10 veces más que los alumnos pobres. Además, se calcula que alrededor de 40%

del aporte estatal a las universidades proviene de impuestos no progresivos a la compraventa de mercancías, que afecta desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos y con escasa representación en la enseñanza superior. Lo dicho significa, en la práctica, que una alta proporción de los alumnos provenientes de los estratos altos y medios recibe sin costo directo su educación, que más tarde le permite obtener significativas ventajas monetarias y no monetarias a lo largo de su carrera ocupacional.

Eficiencia interna

Existen incontables señales sobre el bajo grado de eficiencia de las instituciones oficiales. Por ejemplo, el fisco venezolano desembolsa tres veces el costo ideal por graduado, misma situación que se repite en el caso de las universidades de Nicaragua. Por su parte, en Chile, las universidades públicas ocupan en promedio nueve años para formar graduados cuyas carreras, nominalmente, exigen una duración de cinco años.

La reducida eficiencia y altos costos de los graduados se explica, en parte, por las altas tasas de deserción que a su vez son producto de la baja selectividad de los sistemas de ingreso y la mala calidad de la formación en el nivel secundario [bachillerato]. Asimismo, por el hecho de que en las instituciones públicas los docentes trabajan con pocos alumnos y, en cambio, existen numerosos administrativos en proporción a los maestros. Además, el personal docente ha conseguido, en diversos países, relativos privilegios, entre ellos el de la inamovilidad en el cargo. Algo parecido ocurre con el personal no docente. Con razón se queja-

ba el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, de que su institución destina 50% de su presupuesto al pago de los salarios de los no docentes; mientras con el otro 50% se pagan los sueldos docentes.

A todo lo dicho viene a agregarse el hecho de que los países de la región llegaron a gastar, a fines de la década pasada, un monto promedio por alumno menor que todas las demás regiones del mundo.

IV

Creo que los problemas de calidad, equidad y eficiencia recién identificados tienen su origen, básicamente, en el *tipo de relaciones* existente entre los sistemas de educación superior y los estados nacionales.

¿Qué caracteriza esas relaciones? A mi parecer, tres rasgos interconectados:

Primero, el Estado financia la educación superior mediante una fórmula a la vez paternal y benevolente, cuyo principal mecanismo es la asignación incremental de recursos públicos desvinculados de cualquiera consideración de calidad, equidad o eficiencia.

Segundo, el Estado reserva monopólicamente la oferta educativa a instituciones subsidiadas o, en caso contrario, desregula al máximo el acceso de las instituciones privadas al mercado educacional.

Tercero, el Estado entrega el desarrollo del sistema a las dinámicas corporativas internas, renunciando a usar cualquier tipo de instrumento para guiarlo en función de metas u objetivos.

Desde el punto de vista de las instituciones, dicha estructura de relaciones significa:

En *primer* lugar, que ellas se benefician del trato benevolente del Estado sin estar sujetas a estímulos que las induzcan a mejorar sus niveles de actividad, a innovar y a responder públicamente por su desempeño.

En *segundo* lugar, que las instituciones —sea o no que reciban aportes fiscales— se desarrollan sin evaluación, como entes autocontenidos, responsables sólo frente a sí mismas.

En *tercer* lugar, que las nuevas instituciones —públicas o privadas— no necesitan satisfacer exigencias de acreditación, pudiendo desarrollarse al margen de cualquier control de calidad.

Mi impresión es que esa estructura de relaciones ha entrado definitivamente en crisis. Y que requiere, con urgencia, ser sustituida por un *nuevo contrato social* entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el gobierno.

El nuevo contrato buscaría producir dos efectos principales:

Por un lado, sustituir el débil control administrativo del Estado por una relación basada en la evaluación de resultados; por otro, sustituir el financiamiento estatal automático a las instituciones por una relación donde las universidades diversifiquen sus fuentes y el Estado asigne sus recursos en función de objetivos y metas convenidos.

Se trataría, en breve, de introducir sistemáticamente procedimientos de evaluación que aseguren al público que las instituciones cumplen ciertos estándares mínimos de calidad; logran las metas convenidas; emplean con eficiencia sus recursos y están en condiciones de responder frente a sus alumnos, a los pares y a la sociedad.

Los resultados de la evaluación servirían a las propias instituciones para

mejorar su desempeño y distribuir incentivos, y podrían servir a la autoridad para asignar recursos, establecer premios y sanciones, e informar al público, en general, para definir políticas y programas de fortalecimiento institucional.

Simultáneamente, el nuevo contrato concibe el *financiamiento* de la educación superior como una responsabilidad compartida entre el Estado, los usuarios, las propias instituciones y la sociedad.

Desde el punto de vista del *financiamiento estatal*, implicaría reemplazar la fórmula de asignación automática por otra más sensible a las diferencias entre las instituciones, sus funciones, desempeño y productividad. Fórmulas de este tipo han sido discutidas y en ocasiones ensayadas en México, Brasil, Venezuela y Chile. Otros países empiezan a moverse en la misma dirección.

Actualmente varios han optado, además, por separar el financiamiento de la investigación, canalizándolo bien sea mediante uno o más fondos concursables o bien mediante la asignación de “estímulos” especiales para los investigadores incorporados a una carrera o sistema de investigación.

Adicionalmente, y en la medida que las universidades públicas ingresen al régimen de pago o arancelamiento de los estudios, el Estado debería asignar recursos directamente a los alumnos, mediante esquemas de becas y préstamos. Un reciente estudio muestra las ventajas que tendría la adopción de este tipo de medidas para la eficiencia, equidad y estabilidad de los sistemas. Muestra asimismo que su impacto económico no sería despreciable. En efecto, introduciría ahorros que para varios países de la región se estiman conser-

♦ vadoramente en 15% del gasto público destinado al sector durante los próximos 25 años.

Por último, el Estado podría vincular la asignación de un monto variable de recursos a los resultados de los procedimientos de evaluación que se pongan en práctica. Por ejemplo, una comisión establecida por el gobierno de Chile en el año 1990, sugirió que se vinculasen recursos públicos a la participación *voluntaria* de las instituciones (públicas y privadas) en los procedimientos de evaluación que allí se proponen.

Desde el punto de vista de las *instituciones*, el nuevo contrato supone diversificación de las fuentes de recursos; mayor grado de competencia entre las universidades; manejo administrativo más eficiente, y la necesidad de mejorar sus propias capacidades para obtener apoyo de la sociedad. Aquí cobran relevancia temas tales como la venta de servicios académicos, la colaboración del sector universitario con el sector productivo y la creación de esquemas para fomentar la filantropía privada y la cooperación internacional en beneficio de las instituciones de educación superior.

Dentro de este nuevo enfoque cabría revisar asimismo el criterio negativo con que hasta ahora se ha juzgado el desarrollo de la *educación superior privada* en la región. Sujeta a reglas comunes de acreditación y evaluación institucionales, constituye una opción ventajosa a través de la cual los países pueden amplificar los recursos —humanos, financieros y organizacionales— con los que cuentan sus sistemas de educación superior. En tales circunstancias no debería ser mirada con desconfianza.

V

Quisiera concluir este trabajo refiriéndome a otro aspecto del desafío que enfrentan nuestros sistemas de educación superior.

He señalado ya que durante los últimos años los países de la región han mejorado su inserción en la economía internacional, su competitividad y sus tasas de crecimiento. Una reciente proyección del Banco Mundial indica que América Latina y el Caribe tienen el potencial para duplicar su tasa promedio de crecimiento a 6% en el transcurso de la próxima década.

Entre los elementos del nuevo cuadro, quizá uno de los más importantes sea el incremento de la *interdependencia económica regional*. Según señala un informe de la CEPAL, "además de los diversos acuerdos oficiales de integración, el proceso también ha avanzado 'de hecho' bajo la influencia de un conjunto de políticas[...] que han tenido por efecto la creación de condiciones similares en un número creciente y ya mayoritario de naciones de la región y alentado así el comercio y la inversión recíprocos".

Sin embargo, las consideraciones sobre dicho proceso no debieran limitarse al análisis de los flujos de bienes entre países. Su resultado más importante, en cambio, es la comunicación, difusión e incorporación de ideas, conocimientos y técnicas; elemento esencial, además, para la producción de innovaciones en todos los ámbitos. De allí la crucial importancia de multiplicar y fortalecer las *redes de conocimiento*, cuyo desarrollo debe ser parte de cualquier esfuerzo integrador.

También en este ámbito hemos avanzado, mediante acuerdos explícitos y

♦ "de hecho", mediante las variadas vinculaciones que se van creando entre personas, grupos de investigación, universidades y empresas.

Con todo, subsisten en este terreno problemas que no hemos sabido abordar y que traban la posibilidad de emprender proyectos de mayor envergadura.

De pronto, nuestros sistemas nacionales de educación superior actúan todavía como a comienzos de siglo, desconectados unos de otros, mirando más hacia el interior que hacia el exterior, sin vínculos orgánicos entre sí, ni siquiera entre países vecinos. Los intercambios académicos son esporádicos y poco sistemáticos. No hay esquemas que posibiliten la formación profesional a nivel transnacional; incluso, existen múltiples trabas burocráticas que dificultan la convalidación de estudios, el reconocimiento de títulos y la prestación de servicios profesionales por parte de nacionales de los demás países. La concentración de esfuerzos para organizar programas doctorales de excelencia es escasa, y es posible que ocurra primero con países del norte que a nivel intrarregional. Nuestras comunidades científicas, en vez de complementar iniciativas y recursos, están todas dedicadas a desarrollar sus componentes endógenos, desperdiciando valiosas oportunidades de complementar esfuerzos y de aprovechar sus ventajas comparativas en favor de las demás.

Aun en el ámbito de los estudios comparados sobre educación superior, y de las acciones cooperativas para la definición de políticas y el desarrollo de capacidades académicas a nivel regional, se avanza con exasperante lentitud y precariamente. Las instancias de

coordinación existentes son febles, la investigación especializada es débil, y no hay formación de recursos humanos para trabajar en este ámbito. Por su parte, los gobiernos tienden a hacer retórica y no actúan.

Todo lo anterior contrasta con la febril actividad integradora en el ámbito económico y con la globalización en curso de las comunicaciones. Es como si la cabeza pensante de la región se fuera quedando atrás, irremisiblemente, mientras el "cuerpo material" se mueve más rápido y con mayor imaginación en el plano de las inversiones, del comercio y de las alianzas empresariales.

Entre Argentina y Chile, por ejemplo, no hay nada parecido en el dominio académico e intelectual que acompañe lo que está sucediendo en el plano de la integración física y económica.

A mediano plazo, esta situación es insostenible. Las propias empresas, para ser exitosas, necesitan de una importante capacidad para procesar información acerca de lo que sucede en la economía, en la política y en la tecnología, a nivel mundial y regional. Según señalaba días atrás un empresario, "tan importante como los corredores bioceánicos o las interconexiones de ferrocarriles, con que se pretenden unir los puertos del Pacífico y los del Atlántico para facilitar el comercio del continente y con el resto del mundo, es el acceso oportuno a la información económica y de negocios sobre lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos y en el resto del mundo. Ya no bastan los reportes anuales o trimestrales, a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Se necesita información instantánea", concluía.

He ahí, pues, el mayor desafío para la integración de nuestros países: estar en condiciones de crear, por encima de la red de intercambios materiales y de mercado, redes de conocimiento, de comunicación política, de intercambio y procesamiento de información, de colaboración académica y de cooperación entre universidades y empresas.

La infraestructura necesaria para esas redes es hoy más vasta y sofisticada que nunca antes. También las condiciones políticas son auspiciosas. Compartimos en la región, por primera vez en muchas décadas, una común experiencia democrática y la firme decisión de no retornar al reciente pasado autoritario, con su secuela de violaciones y divisiones. Culturalmente, nuestras naciones están maduras para abordar, en sus propios términos, los retos de la modernidad.

Gran parte del futuro depende, por tanto, de lo que hagamos en la educación, particularmente en su nivel superior.

La historia nos enseña que la universidad es una institución resistente. Ha sobrevivido a guerras, pestes y conmociones sociales por más de 700 años. Un grupo de investigadores identificó sólo 66 organizaciones que han existido continuamente desde la Reforma protestante del siglo XVI. De ellas, 62 son universidades.

Hoy las instituciones de educación superior están llamadas, otra vez, a cruzar el umbral de un nuevo siglo y a convertirse en un agente de esas redes de conocimiento que son el signo y el principal medio de nuestra integración.